



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

///doba, 27 de abril de 2022.

Y VISTOS:

Estos autos: **"LEGAJO DE APELACIÓN en autos DALINGER SEBASTIÁN ENRIQUE, ITURRIA, MATIAS EMANUEL por ADULTERACIÓN DOLOSA DE REGISTROS", Expte. N° 88747/2018/3/CA2**, radicados en la Sala A de esta Cámara Federal de Apelaciones, puestos a despacho a fin de resolver sobre los recursos de apelación interpuestos por la Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Villa María, doctora María Luz Felipe, en representación del encartado Matías Emanuel Iturría y el doctor Julio Roberto Amuchástegui en calidad de defensor del imputado Sebastián Enrique Dalinger, en contra de la resolución dictada con fecha 6.3.2020 por el Juzgado Federal de Villa María, en cuanto dispuso: **"I.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA de Matías Emanuel ITURRIA -de condiciones personales referidas supra-, por el delito que provisionalmente se califica como "Alteración Dolosa de Registros", previsto en el art. 11 inc. a) de la nueva ley vigente 27.430 -CINCO HECHOS- (Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto) en concurso real y en calidad de autor (art. 45 y 55 del C.P.); todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 306 y 312 ambos del Código Procesal Penal de la Nación. II.- ORDENAR el PROCESAMIENTO SIN PRISIÓN PREVENTIVA de Sebastián Enrique DALINGER -de condiciones personales referidas supra-, por el delito que provisionalmente se califica como "Alteración Dolosa de Registros", previsto en el art. 11 inc. a) de la nueva ley vigente 27.430 -UN HECHO- (Octavo) en calidad de autor (art. 45 del C.P.); todo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 306 y 312 ambos del Código Procesal Penal de la Nación. III.- TRABAR embargo sobre bienes de los imputados Matías Emanuel ITURRIA y Sebastián Enrique**

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

DALINGER, por la suma de pesos cien mil (\$100.000) -cada uno de ellos-, la que resulta suficiente a los fines dispuesto en los artículos 518 del C.P.P.N y 29 del C.P., debiendo anotarse su inhabilitación si no tuvieran bienes o si los mismos fueren insuficientes".

Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 6.3.2021 el Juez Federal de Villa María dispuso ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Matías Emanuel Iturria, por el delito de "Alteración dolosa de registros", previsto en el art. 11 inc. a) de la ley 27.430 -cinco hechos- en concurso real y en calidad de autor (art. 45 y 55 del C.P.) y ordenar el procesamiento sin prisión preventiva de Sebastián Enrique Dalinger, por el delito de Alteración dolosa de registros, previsto en el art. 11 inc. a) de ley vigente 27.430 -un hecho- en calidad de autor (art. 45 del C.P.). Asimismo, se trabó embargo sobre bienes del imputado Matías Emanuel Iturria, por la suma de pesos cien mil (\$100.000), de conformidad a lo previsto en los artículos 518 del CPPN y 29 del CP.

Para así resolver apuntó que, de las constancias de autos y la prueba recolectada, se encontraría acreditado, con el grado de probabilidad que requiere la etapa procesal, la existencia de los hechos denunciados y la responsabilidad penal de los imputados Matías Emanuel Iturria y Sebastián Enrique Dalinger.

El Tribunal señaló que del material probatorio se pudo determinar que Iturria habría modificado el registro informático del fisco nacional respecto de las obligaciones tributarias de la denunciante en autos, pudiendo verificarse del informe de fs. 47/50 que a la fecha de los hechos el imputado Iturria era el titular de la línea telefónica 3534529279 correspondiente a las IP





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

desde las cuales se habrían llevado a cabo las maniobras ilícitas investigadas en autos.

Asimismo, sostuvo que se constató que el imputado Dalinger habría modificado el registro informático del fisco nacional respecto de las obligaciones tributarias de la denunciante Herrera, lo cual se verificaría del informe de fs. 38 que da cuenta que, a la fecha del hecho, el IP desde el cual se habría efectuado la conducta ilícita investigada en autos, pertenecería al incoado Dalinger.

A fin de sustentar su compromiso procesal, valoró especialmente la documentación presentada por AFIP a fs. 9/20, la cual evidencia los cambios en el registro informático de la contribuyente Andrea Ayelen Herrera correspondientes al domicilio, alta de Impuestos, Ganancias, IVA y Bienes Personales, modificación en las actividades económicas, que surgen de las constancias obrantes en autos.

En cuanto al embargo impuesto a ambos imputados, pero que fuera materia de recurso por parte de Matías Emanuel Iturria, considerando la ausencia de actor civil en este proceso, a los fines de garantizar el cumplimiento de la pena pecuniaria y el pago de las costas del proceso, con el objeto de asegurar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar del ilícito reprochado, dispuso la traba de embargo sobre los bienes propios del imputado Iturria por la suma de pesos cien mil (\$100.000). Para decidir de ese modo, tuvo en consideración las condiciones personales del imputado, conforme su declaración indagatoria obrante a fs. 176/177, como así también que manifestó ser titular de bienes registrables.

II.- a) En oportunidad de deducir recurso de apelación, comparece la Dra. María Luz Felipe, Defensora

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Villa María, en representación de Matías Emanuel Iturria (fs.25/27).

Se agravia la defensa en relación a lo resuelto por el Instructor con fecha 6.3.2021, por cuanto ordena el procesamiento sin prisión preventiva de Matías Emanuel Iturria, por el delito de Alteración dolosa de registros.

La defensa entiende que el decisorio impugnado no constituye una derivación razonada de las circunstancias comprobadas de la causa y omite considerar elementos de valor decisivo, por lo que satisface sólo de manera aparente la exigencia de motivación (art. 123 CPPN), presentándose como una decisión jurisdiccional arbitraria, afectando así la garantía de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN).

Asimismo, plantea la inconstitucionalidad de la norma que prevé la alteración dolosa de registros. En este sentido, señala que la norma define un tipo de peligro abstracto que anticipa la protección del bien jurídico a estadios anteriores a la lesión del bien jurídico, en clara contraposición con el principio de lesividad (art. 19 de la CN), por lo que solicita se declare su inconstitucionalidad en el presente caso (cita doctrina).

Por otra parte, funda su pretensión de declaración de inconstitucionalidad en la escala penal que califica de desproporcionada si se la compara con otras figuras del mismo régimen penal. Dicha circunstancia, a su criterio, vulnera el principio de proporcionalidad mínima entre la pena y la magnitud del injusto y de la culpabilidad.

En cuanto al decisorio en crisis, expresa que el mismo no satisface las exigencias de debida fundamentación del art. 123 del CPPN, resultando a su entender un escueto análisis, que le dedica un párrafo a cada imputado y analiza un único elemento de prueba que no es concluyente,





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

por lo que no satisface las exigencias de la debida fundamentación.

Advierte que la circunstancia de que el servicio de internet haya estado bajo su titularidad, no significa que la maniobra imputada haya sido realizada por él. En efecto, se trataba de un espacio de "co-working" que consiste en compartir un lugar físico y los gastos comunes con otras personas y/o empresas. Refiere, al respecto, que compartía espacio con tres personas, quienes han tenido acceso no solo a la mencionada IP, sino a todo el espacio físico, desde el mes de mayo de 2016 hasta mayo de 2018.

En consecuencia, solicita se revoque la resolución puesta en crisis y se disponga, como hipótesis de mínima y por aplicación del *in rubio pro reo*, la falta de mérito (art. 2 y 309, CPPN).

Asimismo, se agravia en cuanto a la falta de fundamentación respecto a la suma ordenada en concepto de embargo, por entender que no se da razón alguna para evaluar la corrección de su decisión, con lo que su decisión, respecto a este punto tampoco satisface a su entender, las exigencias impuestas por el art. 123, CPPN y art. 33 de la Constitución Nacional (debido proceso).

En definitiva, sostiene que la resolución en crisis, también en este punto, deviene nula por falta de fundamentación adecuada (art. 123, CPPN) y violatoria del derecho de defensa (art. 18, CN) y del debido proceso (art. 33, CN).

Por ello, solicita que sea revocada la resolución estableciendo un monto apropiado a los rubros que se pretenden caucionar en el presente caso. Formula reserva de Caso Federal y casación.

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

b) Por su parte, comparece el doctor Julio Amuchástegui en su carácter de abogado defensor del imputado Sebastián Enrique Dalinger (fs. 28/30).

La defensa se agravia por cuanto la resolución en crisis, a su criterio, violenta el principio de fundamentación lógica y legal, por la errónea aplicación de la ley.

Expresa que en el fallo recurrido no existe una adecuación entre los hechos y las conclusiones, que los fundamentos dados son aparentes o inexistentes y violatorios del principio de congruencia ya que afectan el debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones judiciales.

Refiere, además, que el único elemento probatorio contra su defendido resulta ser la titularidad de un servicio de internet, el cual se utilizó para producir el error y la adulteración que se le imputa a su defendido.

De este modo, señala que el sólo hecho de ser titular de un servicio de internet no lo convierte en autor de un delito y que el Instructor debió expresar en forma clara y precisa los motivos para otorgar la probabilidad necesaria para procesar a Dalinger en carácter de autor del delito.

En atención a la prueba reunida, sostiene que no existe constancia documental o informática que permita verificar la hora del hecho y la presencia del imputado allí, lo cual revelaría que la sentencia no se encuentra debidamente fundada.

Por lo expuesto, sostiene que la resolución apelada resulta arbitraria, y solicita su revocación. Formula reserva del Caso Federal (art. 14 de la Ley 48).

III.- En esta Instancia, con fecha 10.8.2020, comparecen la Defensora Pública Oficial Coadyuvante, en representación del imputado Matías Emanuel Iturria, como

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

asimismo -con fecha 13.8.2020-, el doctor Julio Roberto Amuchástegui, en representación del imputado Sebastián Enrique Dalinger, a fin de informar conforme a lo prescripto por el art. 454 del CPPN, reproduciendo los agravios expuestos en oportunidad de interponer los correspondientes recursos de apelación, a los cuales remite el Tribunal por cuestiones de brevedad.

IV.- Con fecha 4.01.2021, se recibió oficio electrónico del Juzgado Federal de Villa María, a fin de acompañar resolución de sobreseimiento del imputado Dalinger cuyo procesamiento se encuentra aquí apelado (v. fs. 49/57).

V.- Sentadas así las posturas asumidas por las partes, corresponde introducirse propiamente en el tratamiento de los recursos de apelación deducidos, de acuerdo al sorteo de votación realizado en autos (conf. sorteo de orden de votación obrante a fs. 48).

El señor Juez de Cámara Dr. Ignacio María Vélez Funes, dijo:

I.- En primer término, debo decir que, con motivo del sobreseimiento dispuesto en favor del imputado Sebastián Enrique Dalinger (DNI 32.059.827), mediante sentencia firme dictada con fecha 30.12.2020 por el Juzgado Federal de Villa María, el recurso de apelación deducido por su defensa técnica en contra del procesamiento decidido con anterioridad (6.3.2020), ha devenido en materia abstracta.

Dadas las circunstancias sobrevinientes ha quedado sin virtualidad ni trascendencia jurídica o práctica el agravio planteado por el apelante, correspondiendo que así se lo declare. Así lo ha entendido la CSJN, al decir que: *"... sus fallos deben atender a las circunstancias existentes al momento en que se los dicta -aunque aquellas sean sobrevinientes a la interposición del remedio*

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

federal-..." (Fallos, 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177, entre otros).

II.- Debo ahora ingresar al tratamiento del recurso de apelación deducido por la defensa del imputado Matías Emanuel Iturria, en contra de la resolución dictada con fecha 6.03.2020 por el Juzgado Federal de Villa María, mediante la cual dispuso su procesamiento por la presunta comisión del delito de *alteración dolosa de registros* - cinco hechos en concurso real- (conf. art. 11 del Régimen Penal Tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430, art. 45 y 55 del CP y art. 306 del CPPN).

a) En primer lugar, corresponde efectuar el control de logicidad y observancia de las formas esenciales exigidas en el proceso penal en resguardo de los derechos de los justiciables, a efectos de establecer si la resolución sometida a revisión constituye un acto jurisdiccional válido susceptible de producir sus efectos propios o, bien, como sostiene la defensa, se ha dictado en violación al imperativo legal del art. 123 del CPPN, en función de los requisitos establecidos en los arts. 306 y 308 del CPPN, adoleciendo de vicios en su fundamentación.

Ello así, toda vez que, de prosperar, por su naturaleza, impediría analizar la acreditación de la participación penalmente responsable del imputado en los hechos fijados por la Instrucción (conf. arts. 167 inc. 3 y 168 del CPPN).

Al respecto, cabe mencionar que, en nuestro sistema legal procesal, no existen más nulidades que las específicamente decretadas por la ley o cuando de otra forma se haya afectado un derecho constitucional esencial de modo concreto (exclusiones probatorias).

En el presente, se ha invocado como motivo de nulidad ~~del decisorio puesto en crisis, la violación de lo normado~~

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

por el art. 123 del CPPN, que en forma expresa estipula: *"las sentencias y los autos deberán ser motivados, bajo pena de nulidad..."*. En concreto, el apelante alega que la fundamentación del auto de procesamiento resulta insuficiente y que la valoración de la prueba efectuada no se compadece con las reglas que emanan de la sana crítica racional.

La fundamentación de la sentencia constituye una exigencia establecida en forma implícita en la Constitución Nacional, cuando instauro el principio del juicio previo y el debido proceso legal. Asimismo, resulta una exigencia lógica que la decisión que resuelve toda cuestión sometida a tratamiento, ponga al descubierto, al menos sintéticamente, las razones de hecho y de derecho que dieron motivo a dicha conclusión.

Por otra parte, la fundamentación que se exige al momento de resolver es la única forma a través de la cual las partes intervinientes en el proceso pueden efectuar, de manera eficaz, el contralor del razonamiento del Juez interviniente garantizando de esta forma el ejercicio del derecho de defensa.

Al respecto, se ha dicho que: *"la fundamentación constituye un requisito insoslayable para el aseguramiento de la racionalización del poder, extremo básico dentro del modelo republicano (art.33, CN), como también cumple una doble finalidad: exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los recursos, so pena de afectar las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso"* (CNCP, sala III, 21.12-98, c.1693, reg.548.98.3, citado en Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Eduardo Jauchen, Ed. Rubinzal-Culzoni).

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

En suma, las resoluciones judiciales dan cumplimiento a tal exigencia cuando en forma clara y precisa explicitan las razones de hecho y derecho que llevan a adoptar la solución a la que arriban, ello producto de un razonamiento lógico que dé respuesta a todas las cuestiones planteadas (CNCP, sala II, 7-9-98, c.1734, Reg. 2167.2.), lo que en el presente caso y conforme las consideraciones efectuadas, se verifica.

Sobre el tópico, destacada jurisprudencia señala que *"la motivación del auto de procesamiento -art. 123 del CPPN- implica dar a conocer acabadamente las razones por las que se considera a una persona responsable de la comisión de un delito, debiendo exponerse en forma clara cuáles son los elementos de prueba incriminantes que permiten al juzgador construir dicho razonamiento. Si ese esquema no se respeta (prueba-razonamiento-decisión motivada), se entorpece la construcción del objeto del proceso provocando efectos directos en la garantía constitucional de defensa"* (CFAM.D.P. Expediente N° 2308, "Incidente de Apelación - Galatro Cecilia s/DGI Ruca Moar", Reg.:2387, 18/05/99).

En el mismo sentido, reconocida doctrina procesal ha expresado que *"... la enunciación de los hechos estriba en la motivación del auto -art. 123 del CPPN-. En ella el Juez debe meritar los razonamientos que le conducen a considerar la existencia del hecho, indicando, escrupulosamente, las probanzas de las que surge ese aserto. Lo mismo debe hacerse en cuanto a la participación del procesado. Aunque basta con que la fundamentación sea somera, no puede faltar, pues es imprescindible"* (Francisco J. D'Albora "Código Procesal Penal de la Nación anotado, comentado, concordado", 8va. edición, Ed. Abeledo

Perrot, Buenos Aires, pág. 351).

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

Por otro lado, debe considerarse que el procesamiento constituye un juicio incriminatorio provisorio e intermedio que supone un estadio avanzado en la investigación y, de esta forma, una mayor especificidad respecto a los extremos relativos a la determinación del delito, el imputado y sus circunstancias. En este auto intermedio y provisorio, el legislador exige: *“una somera enunciación de los hechos que se le atribuyen (al imputado)”* (conf. art. 308 del CPPN).

Ahora bien, considero que la resolución dictada por el Juez Federal de Villa María, que fuera recurrida por la defensa técnica del imputado, satisface el requisito fundamental de fundamentación y, de este modo, resguarda las garantías constitucionales que rigen la correcta administración de justicia.

La regla general en materia de nulidades en el procedimiento penal se encuentra establecida en el art. 166 del CPPN, en cuanto reza: “Los actos procesales serán nulos sólo cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad”. Este precepto determina que la sanción procesal indicada importa una grave decisión jurisdiccional que elimina un acto del proceso por estar viciado de una irregularidad de tal entidad que su iniquidad acarrea la invalidación.

La nulidad requiere la constatación de un perjuicio concreto para alguna de las partes, siendo improcedente su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley. Es decir, para que prospere la declaración de nulidad se requiere la existencia de un perjuicio concreto para alguna de las partes, puesto que cuando se adopta en el sólo cumplimiento de la ley importa un manifiesto ~~exceso ritual no compatible con el~~ buen servicio de

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

justicia (CSJN Fallos: 295:961; 298:312; 302:221; 306:149 y 1360; 310:1880; 311:1413 y 2337; 323:929, entre otros).

El razonamiento efectuado por el juez para arribar a una determinada decisión debe estar plasmado de forma clara y precisa en la propia resolución, de modo tal que pueda verificarse que su decisión deriva de una valoración realizada por el juzgador a la luz de la razón y no a la libre o íntima convicción, porque no se trata de resolver según la apreciación subjetiva del juzgador.

Al respecto, la doctrina considera que se cumple con esta obligación si el fallo está racional y concordantemente fundado, permitiendo extraer de las valoraciones que realiza el acierto de la conclusión a que llega, siendo indispensable que exista un sustento operante como ligazón racional de la prueba con la aseveración. Jamás puede quedar reservada a la intimidad de la conciencia de quien juzga porque violenta el principio de la sana crítica racional.

De tal modo, un pronunciamiento válido debe contener un completo y fundado análisis sobre la base de los elementos de convicción reunidos libremente por el Instructor, sin omitir la constatación de la materialidad de los hechos, la forma de participación de los imputados y su responsabilidad criminal, evitando de este modo incurrir en valoraciones fragmentarias o parciales, atendiendo siempre las reglas de la sana crítica racional.

Efectuadas tales consideraciones teóricas acerca de la obligación legal de fundamentar las sentencias, advierto que la resolución sometida a revisión de esta Alzada satisface válidamente los requisitos de fundamentación expuestos, más allá de la discrepancia con la solución adoptada que pudieran albergar los apelantes.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

En este sentido, considero que el cuestionamiento efectuado por el recurrente deriva del disenso respecto de la decisión adoptada por el Instructor y el mérito contenido en ella.

En efecto, no se advierte que el decisorio se encuentre inmotivado, sino que, por el contrario, el señor Juez ha brindado sólidos argumentos en pos de la justificación de su razonamiento, sin perjuicio que éste no sea compartido por los recurrentes. Para formular un planteo nulificante no basta discrepar con la valoración efectuada por el Tribunal actuante, sino que debe demostrarse que se ha apartado de las reglas impuestas en el Código de Rito, incurriendo en ausencia de fundamentación suficiente o adoptando conclusiones que no resulten derivación razonada del derecho vigente.

En el caso concreto, aunque los recurrentes no compartan las conclusiones arribadas por el Instructor, lo cierto es que se ha realizado un profundo análisis de los elementos de convicción incorporados al proceso y se han brindado los argumentos en base a los cuales el magistrado sostuvo la existencia de un estado intelectual de probabilidad respecto de la existencia de los hechos y la participación culpable del imputado, examinando y valorando el caudal probatorio, lo cual excluye por cierto cualquier tacha de arbitrariedad.

En definitiva, sobre la fijación de dichas premisas el magistrado presentó sólidos argumentos, mediante la valoración de la prueba en función de los principios de la sana crítica racional y, en cuanto al derecho aplicable, propició una interpretación sistémica del derecho sustantivo y procedimental aplicable a la luz de los principios que lo informan, que podrá o no compartirse pero que, en modo alguno, puede predicarse que lesione el

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

derecho de defensa constitucionalmente consagrado en favor del imputado y su defensa.

b) Previo a todo, debo señalar que esta Sala se expidió recientemente sobre una cuestión de naturaleza jurídica y fáctica similar a la presente, habiendo de replicar en esta oportunidad el criterio allí seguido, en cuanto resulte aplicable (ver resolución recaída en autos: "CUPPER, Ricardo Esteban y otros sobre Asociación Ilícita Fiscal", Expte. FCB 38737/2019/CA7, de fecha 7.12.2021).

1. Hechos investigados

Conforme surge del requerimiento de instrucción, se endilga al imputado Marías Emanuel Iturria la comisión de los siguientes hechos:

HECHO PRIMERO: Entre las 01:16 horas y las 01:21 horas del día 16/07/2016, Matías Emanuel Iturria, habría modificado dolosamente, el registro informático del fisco nacional (AFIP - DGI) relativo a la Sra. Andrea Ayelen Herrera, CUIT 27376205318, con el propósito de disimular su real situación fiscal. Dicha maniobra, se habría perpetrado a través de la IP 190.136.239.108, mediante el empleo de la clave fiscal de Herrera, y a partir de ello, habría modificado información consistente en actualización de domicilios (transacción 27314018 y 27314019), actualización en actividades económicas tales como servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario (Id. 731001) y en servicios de publicidad N.C.P. (Id. 731009) (transacción 27314022) y habría generado el alta en impuestos sobre bienes personales, impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado (transacción 27314023 y 27314024). **HECHO SEGUNDO:** Entre las 19:27 horas y las 19:41 horas del día 11/08/2016, Matías Emanuel Iturria, habría modificado dolosamente, el registro informático del fisco nacional (AFIP - DGI)

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

relativo a la Sra. Andrea Ayelen Herrera, CUIT 27376205318, con el propósito de disimular su real situación fiscal. Dicha maniobra, se habría perpetrado a través de la IP 186.153.218.14, mediante el empleo de la clave fiscal de Herrera, y a partir de ello, habría modificado información consistente en actualización de domicilios (transacción 27685955) y actualización de actividades económicas tales como reparación y mantenimiento de equipos N.C.P. (Id. 331900) y servicios personales N.C.P. (Id. 960990) (transacción 27685791).

HECHO TERCERO: Entre las 23:49:36 horas del día 17/08/2016, Matías Emanuel Iturria, habría modificado dolosamente, el registro informático del fisco nacional (AFIP - DGI) relativo a la Sra. Andrea Ayelen Herrera, CUIT 27376205318, con el propósito de disimular su real situación fiscal. Dicha maniobra, se habría perpetrado a través de la IP 186.153.218.14, mediante el empleo de la clave fiscal de Herrera, y a partir de ello, habría modificado información consistente en actualización de actividades económicas tales como servicios de reparación y mantenimiento de máquinas y equipos N.C.P. (Id. 331900), servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario (Id. 731001) y servicios de publicidad N.C.P. (Id. 731009) (transacción 27810816). **HECHO CUARTO:** Entre las 19:09 horas del día 24/08/2016, Matías Emanuel Iturria, habría modificado dolosamente, el registro informático del fisco nacional (AFIP - DGI) relativo a la Sra. Andrea Ayelen Herrera, CUIT 27376205318, con el propósito de disimular su real situación fiscal. Dicha maniobra, se habría perpetrado a través de la IP 186.153.214.200, mediante el empleo de la clave fiscal de Herrera, y a partir de ello, habría emitido una factura electrónica, tipo de comprobante Factura A, a nombre de

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

Massio S.A. CUIT 30709742996, C.A.E. N° 6648770887045, por el importe total de \$2.899,98, e importe neto de \$2.396,68. **HECHO QUINTO:** A las 23:10 horas del día 25/08/2016, Matías Emanuel Iturria, habría modificado dolosamente, el registro informático del fisco nacional (AFIP - DGI) relativo a la Sra. Andrea Ayelen Herrera, CUIT 27376205318, con el propósito de disimular su real situación fiscal. Dicha maniobra, se habría perpetrado a través de la IP 186.153.214.200, mediante el empleo de la clave fiscal de Herrera, y a partir de ello, habría emitido una factura electrónica, tipo de comprobante Factura A, a nombre de M. Tagle (H) y CIA SACIF, CUIT 3056626248, C.A.E. N° 66348794369600, por el importe total de \$1.350,00 e importe neto de \$1.115,70." (Véase fs. 152/154).

2. Situación procesal de Matías Emanuel Iturria

De acuerdo a la plataforma fáctica de las imputaciones que pesan en contra del encartado y a los fines de analizar su situación procesal, corresponde efectuar algunas breves consideraciones acerca del estadio procesal por el que transita la presente causa, para luego abordar las objeciones puntuales formuladas por la defensa apelante.

En particular, debo referirme al alcance que corresponde asignarle al auto de procesamiento, en el ordenamiento procesal vigente, tal como está previsto en artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación.

Es unánime el entendimiento de que el procesamiento constituye una decisión jurisdiccional de carácter provisional que puede ser revocada o modificada durante el curso de la instrucción cuando la aparición de nuevos elementos así lo justifiquen (art. 311 del CPPN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

Así, con base en la prueba colectada y valorada conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez debe arribar a la convicción, sin necesidad de que exista certeza plena, respecto de la comisión de un hecho delictivo y que el imputado es culpable como participe en él (arts. 45 y 46 del CP).

De tal forma y en la medida que exista probabilidad, deben indicarse cuáles son los elementos de cargo existentes y que generan convicción suficiente respecto de la existencia o no del hecho ilícito y la responsabilidad penal que cabe asignar al imputado.

En tal sentido, se ha dicho que *"... el procesamiento debe ser conceptuado como un juicio provisional acerca de la posible culpabilidad o merecimiento de pena por parte del imputado, con respecto a un hecho penalmente relevante verificado en concreto, y apoyado en un conocimiento probable ante la existencia de elementos suficientes de convicción para dar paso a una acusación"* (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, Tomo II, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 500/507).

3. El delito de alteración dolosa de registros

En orden a la imputación que pesa sobre el imputado Matías Emanuel Iturria, cabe referir que el texto legal de la figura penal de alteración dolosa de registros, dispone: *"Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el que de cualquier modo sustrajere, suprimiere, ocultare, adulterare, modificare o inutilizare: a) Los registros o soportes documentales o informáticos del fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relativos a las obligaciones tributarias o de los recursos de la seguridad social, con el propósito de disimular la real situación fiscal de un obligado; b) Los*

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

sistemas informáticos o equipos electrónicos, suministrados, autorizados u homologados por el fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre y cuando dicha conducta fuere susceptible de provocar perjuicio y no resulte un delito más severamente penado" (art. 11 del Régimen Penal Tributario, conf. Ley 27.430).

Esta figura "intenta preservar la intangibilidad de los registros o soportes informáticos del Fisco nacional que se encuentren ligados con obligaciones de orden tributario o con recursos destinados al sistema de seguridad social" (RIQUERT, Marcelo Alfredo y CRUZ, Osvaldo Luis (2008), "Derecho penal e informática (2° nota): sus perfiles en la ley penal tributaria y previsional (art. 12, ley N° 24.769)", artículo publicado originalmente en el Periódico Económico Tributario, Ed. La Ley, Bs. As., N° 158 del 29/5/98, págs. 1 y 4 a 7).

Asimismo, existe consenso doctrinal en definir que el autor de este ilícito puede ser, en principio, cualquier persona, siendo desde este punto de vista un delito común. Al respecto, Jorge Enrique Haddad (1997) sostiene, con buen criterio, que podría llegarse "a una situación particular, en la cual se pretenda perjudicar a determinado contribuyente modificando sus registros o soportes sin que él tenga conocimiento, y luego denunciándolo" ("Ley Penal Tributaria Comentada", pág. 89; citado por RIQUERT y CRUZ, ob. cit.).

En este sentido, desde el punto de vista de la autoría "... puede resultar responsable el propio contribuyente cuya situación fiscal se ve favorecida o un tercero, cuyo accionar puede ser o no conocido por aquel" (RIQUERT, MARCELO A. "Régimen penal tributario y





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

previsional. Ley 27.430 comentada. Anotada". Ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2018, pág. 220).

Es preciso expresar que actualmente la mayor parte de la información con la que cuenta el Fisco se encuentra reservados en registros y soportes documentales que han sido digitalizados. De allí que la aplicación de esta figura penal *"hoy cobra vigor dado que todo el universo formal y sustantivo de la tributación gira en torno a medios informáticos, en especial desde la creación del sistema de clave fiscal o contraseña personal e intransferible para operar vía ordenadores. De allí que, a los efectos de calibrar el grado del ardid y consecuentemente la entidad de la maniobra para su posible subsunción típica, deberán considerarse ante todo los detalles inherentes al manejo de dicha clave fiscal (quien, cuando, porque, etc.), de suerte que el análisis del tipo subjetivo es decisivo para decidir la calificación, cuyo propósito va más allá de reprimir el reflejo de una simple disminución del monto de la carga fiscal reflejada. Se requiere de algún plus ligado a las circunstancias de cada caso, en especial quien la perpetró y quien se benefició, la entidad del daño causado a las arcas fiscales, etcétera"* (SFERCO, José María, "Régimen penal tributario comentado", Ed. Thomson Reuters, La Ley, Buenos Aires, año 2020, pág. 112).

La norma penal, en definitiva, tutela la veracidad de la información fiscal que posee el Fisco, máxime cuando una buena parte de ella se conforma y alimenta de la carga de datos que deben suministrar los sujetos obligados.

En tal sentido, se ha dicho que *"la actividad delictiva impacta negativamente sobre el asiento de datos del Fisco y, ello, de por sí, concreta la agresión del bien jurídico de que hablamos. El resultado, entonces, se*

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

configura con la afectación de la actividad de contralor del ente recaudador, en función de la adecuación de los extremos fácticos probados en cuanto a la materialización del dolo de la conducta” (Ob. Cit. pág. 114).

En cuanto a la modalidad delictiva aquí ventilada, reconocida doctrina ha expresado que *“la conducta de quien ingresa al sistema informático de la AFIP sin consentimiento del titular de la Clave Fiscal y modifica datos contenidos en los registros electrónicos, podría encuadrar en el delito contemplado en el artículo 12 de la ley 24.769. Verbigracia, la presentación de declaraciones juradas sobre hechos imponderables no ocurridos, el pedido de autorización de transacciones inmobiliarias inexistentes, la inscripción en el monotributo de grandes contribuyentes, etcétera, a través de Internet tergiversa el conocimiento del Fisco sobre la verdadera situación de los obligados (RETEGUI, Alejandro R. (2010) “Uso no autorizado de la Clave Fiscal” Doctrina Penal Tributaria y Económica, Ed. ERREPAR, pág. 101).*

4. Planteo de inconstitucionalidad de la figura penal de alteración dolosa de registros

La defensa técnica plantea la inconstitucionalidad de la figura penal de *alteración dolosa de registros* (art. 11 inc. a) de la Ley 27.430) por cuanto considera que sanciona una conducta por el solo peligro abstracto al bien jurídico tutelado, incompatible -a su criterio- con el principio de lesividad penal; como así también, por la inadmisibles desproporción que tendría su escala penal, si se la compara con otros delitos tributarios que estima objetivamente más gravosos (conf. art. 19 de la CN).

Previo a todo, debe decirse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Rodríguez”, se ~~expresó en favor del deber de los jueces de la Nación de~~

Fecha de firma: 28/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

evaluar la compatibilidad de las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, con la Constitución Nacional, prerrogativa que no requiere de instancia de parte. En este sentido, sentenció que *"es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos"*.

Tal como expresó Nuestro Máximo Tribunal, es deber de los jueces, en la aplicación de la ley, velar siempre por la supremacía de la Constitución. Al respecto, expresó que: *"... con sustento en las previsiones constitucionales que establecen la supremacía de la Constitución Nacional y la función que le corresponde a los jueces (artículos 31, 116 y 117), desde 1888 hasta la actualidad se ha sostenido `... que es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de **examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella**, constituyendo esta atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha*

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos..." (Fallos: 33:162; el destacado me pertenece).

No obstante, no debe soslayarse que *"la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y, en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad. Solo debe acudirse a aquella cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable"* (Fallos: 324:3219; 285:322, entre otros; el destacado me pertenece).

Ahora bien, en el caso de autos, la defensa técnica de Matías Emanuel Iturria plantea la inconstitucionalidad de la norma que prevé el delito de *alteración dolosa de registros*. En su apoyo, esgrime que la norma define un tipo de peligro abstracto que anticipa la protección del bien jurídico a estadios anteriores a su lesión, en clara contraposición con el principio de lesividad (arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional).

Si bien es cierto que las principales críticas a esta clase de infracciones penales se basan en su posible incompatibilidad con los principios de lesividad, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que puede resumirse en la formula latina *nullum crimen sine injuria*.

En efecto, el artículo 19 de la Constitución Nacional al establecer la exigencia de una "ofensa" está imponiendo una limitación al poder estatal y, consecuentemente, el aseguramiento de un ámbito de libertad infranqueable para los ciudadanos: no cualquier comportamiento puede ser considerado un delito.

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

De esta disposición se desprende la exigencia de un resultado -entendido éste como lesión o puesta en peligro de un bien jurídico- con trascendencia a terceros, para la configuración de un determinado tipo penal. En definitiva, todo aquel comportamiento que no constituya una acción pública que afecte a otros, no podrá ser regulada por el Derecho.

No obstante, el análisis gramatical de la expresión en estudio puede dar lugar a interpretaciones que comprendan a los denominados delitos de peligro abstracto. En este sentido, como lo explica Sagüés, *"de algún modo, significa de cualquier forma o manera: directa o indirectamente, próxima o remotamente, hoy o en el futuro, en acto o en potencia. En síntesis, la Constitución no prohíbe la tipificación de delitos de peligro abstracto"* (SAGÜÉS, Néstor, *"Tenencia de estupefacientes, autolesiones, delitos de peligro abstracto, razonabilidad de las penas y perspectivas del control de constitucionalidad"*, en J.A. 1986-IV-962).

En efecto, las figuras de peligro exigen que "... subjetivamente las conductas tiendan hacia ese resultado y objetivamente representen en general una posibilidad de que los mismos se produzcan..." (en este sentido: NUÑEZ, Ricardo, *"Derecho penal parte general"*, t. I.).

Tengo para mí que el artículo 19 de la Constitución Nacional permite abarcar descripciones típicas que suponen un adelantamiento de las barreras de protección del Derecho Penal a momentos muy alejados de la efectiva lesión a bienes jurídicos, siempre que la conducta importe una perturbación para aquéllos.

Cabe mencionar, al respecto, que la parte no ha invocado, y mucho menos acreditado, que la conducta atrapada por el legislador en el tipo penal de *alteración*

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

dolosa de registros resulte irrazonable por no guardar relación alguna con el peligro para el bien jurídico protegido.

Por el contrario, es sabido que, en tiempos de la era digital, la irrupción a registros informáticos públicos con información sensible y protegida por ley (secreto fiscal), con el grave riesgo que su alteración o modificación importa, en este caso para la hacienda pública y para los contribuyentes cuyos datos y registros resultan afectados, no puede en modo alguno ser relativizado ni mucho menos considerada excesivo o irrazonable, sino que merece la máxima protección legal.

Si bien la norma penal en cuestión no exige el daño concreto a la hacienda pública, sino que se consuma al comprobarse las maniobras llevadas adelante para dificultar la acción fiscalizadora y recaudatoria del Fisco, esta decisión estatal lejos se encuentra de poder ser tildada, en abstracto e hipotéticamente, como incompatible con la garantía constitucional señalada.

Del mismo modo, la decisión parlamentaria de sancionar en abstracto tal comportamiento con una pena que oscila entre los dos (2) y seis (6) años de prisión no encuentra reparo constitucional en el principio de proporcionalidad derivado de la exigencia de culpabilidad, toda vez que compete a una decisión estatal de definición de la política criminal, coherente y adecuada al sistema punitivo previsto en el régimen penal especial tributario.

En este orden, no se advierte de que modo genérico podría esta figura penal, a partir del hecho enrostrado, encontrarse en pugna o repulsión inaceptable con las disposiciones de la Constitución Nacional, en particular, en lo que respecta al principio de lesividad y

~~proporcionalidad reclamado (art. 19, CN).~~

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

En definitiva, con base en los argumentos reseñados, de conformidad al espíritu de nuestro bloque de constitucionalidad, he de propiciar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad articulado.

5. Acreditación de la intervención en los hechos

De la valoración del material probatorio, el señor Juez de grado consideró acreditado, en esta etapa procesal, que Matías Emanuel Iturria habría modificado el registro informático del Fisco nacional respecto de las obligaciones tributarias de la denunciante en autos.

Así, sostuvo que, del informe glosado a fs. 47/50 de autos, se verificó que a la fecha de los hechos el titular de la línea telefónica N° 3534529279 era el imputado de mención, que se corresponde con las IP desde las cuales se realizaron las maniobras ilícitas objeto de investigación.

De esta forma, el magistrado consideró que, mediante la documentación presentada al expediente por AFIP-DGI, se logró corroborar los cambios en los registros informáticos de la contribuyente Andrea Ayelén Herrera, denunciante, correspondientes a: domicilio; alta impositiva en Ganancias, IVA y Bienes Personales; modificación en las actividades económicas, entre otras (conf. documental agregada a fs. 9/20 de los autos principales).

En conclusión, de las circunstancias expuestas y el cuadro probatorio reseñado, considero que en autos se encuentra acreditado, en principio, los extremos objetivos y subjetivos de la imputación penal que pesa contra Matías Emanuel Iturria, respecto de la probable comisión del delito de *alteración dolosa de registros* -cinco hechos-, previsto en el art. 11 del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la Ley 27.430, en calidad de autor (art. 45 de CP).

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

Ahora bien, respecto del reproche sobre la conducta del imputado Matías Emanuel Iturria, su conducta lejos habría estado de constituir una actuación regular en el ejercicio de la profesión de contador público, sino que, desde esa especial posición y con el designio criminal que habría guiado su conducta, ingresó en los registros fiscales de la denunciante y efectuó las modificaciones señaladas en la acusación.

Ciertamente, la actuación profesional regular y habitual carece de reproche jurídico. Por el contrario, adquiere relevancia penal el aporte efectuado por el profesional que, apartándose de la línea de neutralidad trazada por su actuación conforme a las reglas de su profesión, realice una labor diferencial de tal forma de permitir que el plan delictivo perfilado llegue a concretarse en un resultado.

Asimismo, la defensa técnica del imputado Iturria sostiene la insuficiencia conviccional para el dictado de auto de procesamiento, pues considera que *"la circunstancia de que el servicio de internet haya estado bajo su titularidad, no significa que la maniobra imputada haya sido realizada por él. En efecto, se trataba de un espacio de "co-working" que consiste en compartir un lugar físico y los gastos comunes con otras personas y/o empresas"*.

Dicha posición defensiva exculpatoria no se condice con la razonable valoración probatoria de los elementos colectados en autos, a partir de las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica.

En efecto, en autos se colectó prueba suficiente sobre la titularidad del servicio de telefonía y la vinculación con las terminales desde la cuales se habrían ~~realizado las modificaciones~~ achacadas. Por otra parte, no

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

cabe soslayar la trascendencia y relación de los propios términos de la denuncia de Herrera, quien manifestó que trabajaba de niñera y que gestionó personalmente el trámite de su clave fiscal por pedido del contador Iturria, a quien luego dice habérsela entregado, con el agregado de la aseveración de que *"la única persona que puede conocer mi clave fiscal es iturria"* (Sic; v. fs. 1/vta.).

En conclusión, conforme ha quedado expuesto a lo largo de las consideraciones efectuadas, tanto por el Juez de Instrucción como por el suscripto, el conjunto de elementos de convicción hasta aquí reunidos evidencian la corrección del dictado del procesamiento del imputado Matías Emanuel Iturria por los delitos por los cuales ha sido indagado.

En suma, considero que la decisión inculpativa provisional adoptada resulta adecuada, conforme los principios de la sana crítica racional y el estándar probatorio exigido en esta etapa procesal, lo cual me conduce a confirmar el procesamiento dictado.

6. Embargo:

Respecto al monto del embargo fijado en autos, también cuestionado por la defensa, por considerar que resulta excesivo e infundado, entiendo que deben de tenerse en cuenta que las pautas para la determinación del monto de la medida cautelar se encuentran fijadas por el art. 518 del Código Ritual, entre las que se destacan la de garantía de la pena pecuniaria establecida para el delito imputado, la indemnización que pudiera corresponder y las costas del proceso.

Sentado cuanto precede, teniendo en consideración el ilícito atribuido, la intervención del nombrado, los consecuentes montos que eventualmente podrían imponerse

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

(art. 531 y 533 del CPPN) y de acuerdo a la provisoriedad de la etapa procesal en la que se encuentran los presentes autos, entiendo que el monto del embargo dispuesto resulta ajustado a derecho. Asimismo, no se advierte que la medida adoptada se encuentre infundada o desproporcionada con los montos que surgen en esta incipiente etapa.

En definitiva, corresponde confirmar la resolución en este punto, por presentar una fundamentación apropiada. En este sentido, cabe señalar que el magistrado instructor argumentó que: *"a los fines de garantizar el cumplimiento de la pena pecuniaria y el pago de las costas del proceso, con el objeto de asegurar las eventuales responsabilidades que pudieran derivar del ilícito reprochado, se ordenará trabar embargo sobre los bienes propios de los imputados ITURRIA y DALINGER, por la suma de pesos cien mil (\$100.000)... para decidir de ese modo se han considerado las condiciones personales de los imputados ITURRIA y DALINGER, las que surgen de sus respectivas declaraciones indagatorias, obrante a fs. 176/177 y fs. 178/179, respectivamente, quienes expresaron tener condiciones normales de vida obteniendo, percibiendo -en dicho momento- una ganancia mensual de pesos treinta mil (\$30.000) y pesos veinticinco mil (\$25.000), respectivamente. Asimismo, el encartado ITURRIA manifestó ser titular de bienes registrables; por su parte, el imputado DALINGER refirió oportunamente que no posee bienes registrables a su nombre (véase informe de fs. 191/192)"* (Sic).

III.- Por último, con relación a la gravedad de los hechos investigados y en función de los principios rectores que rigen nuestro sistema jurídico en cuanto al pleno ejercicio de los derechos de las víctimas del delito que impone en el art. 3 la Ley 27.372 "a) Reconocer y

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial, el derecho al asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación, celeridad y todos los demás derechos consagrados en la Constitución Nacional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte, demás instrumentos legales internacionales ratificados por ley nacional, las constituciones provinciales y los ordenamientos locales;

b) Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, **cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos conculcados**; c) Establecer recomendaciones y protocolos sobre los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas de delito" (el resaltado es mío), como asimismo atento lo dispuesto por el art. 4 de dicha normativa que establece que "La actuación de las autoridades responderá a los siguientes principios: a) **Rápida intervención**: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección que requiera la situación de la víctima se adoptarán con la mayor rapidez posible, y si se tratare de necesidades apremiantes, serán satisfechas de inmediato, si fuere posible, o con la mayor urgencia; b) **Enfoque diferencial**: las medidas de ayuda, atención, asistencia y protección de la víctima se adoptarán ~~atendiendo al grado de vulnerabilidad~~ que ella presente,

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

entre otras causas, en razón de la edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad u otras análogas; c) No revictimización: la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido, y las molestias que le ocasione el proceso penal se limitarán a las estrictamente imprescindibles”, estimo pertinente que, conforme las maniobras ilícitas que se endilgan en autos al encartado -en cuanto involucran la utilización de claves fiscales ajenas y los potenciales perjuicios y daños que ello conllevaría en la víctima de estos ilícitos-, se disponga que el Juez Federal de Villa María, a los efectos que profundizar la investigación y de evaluar la presunta comisión de otros delitos perseguibles de oficio, corra nueva vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN y de los arts. 3 y 4 de la Ley 27.372.

IV.- Por lo expuesto, corresponde declarar que ha devenido en materia abstracta el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Sebastián Enrique Dalinger.

Asimismo, confirmar el procesamiento del contador público Matías Emanuel Iturria, como probable autor responsable del delito de alteración dolosa de registros -cinco hechos en concurso real- (art. 11, del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la ley 27.430; art. 45 y 55 del CP y arts. 306 del CPPN).

Finalmente, considero que el señor juez de la causa deberá correr nueva vista al Ministerio Público Fiscal, a efectos de que evalúe la posible comisión de otros delitos perseguibles de oficio (art. 180 del CPPN y arts. 3 y 4 de la Ley 27.372. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN). Así voto.

El señor Juez de Cámara, Dr. Eduardo Ávalos, dijo:

Fecha de firma: 28/04/2022
Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 88747/2018/3/CA2

En razón de coincidir con los fundamentos expuestos por el señor Juez preopinante Dr. Ignacio María Vélez Funes, voto en igual sentido. Así voto.

La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela Montesi, dijo:

Adhiero a los argumentos y solución propiciada por el señor Juez de Cámara del primer voto, Dr. Ignacio María Vélez Funes y, en consecuencia, me expido en idéntico sentido. Así voto.

Por todo lo expuesto;

SE RESUELVE:

I.- DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de **SEBASTIÁN ENRIQUE DALINGER (DNI 32.059.827)**, por las razones dadas en la presente.

II.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 6.03.2020 por el Juzgado Federal de Villa María, en cuanto dispuso el **PROCESAMIENTO** del imputado **MATÍAS EMANUEL ITURRIA (DNI 36.328.557)** como probable autor penalmente responsable del delito de alteración dolosa de registros – cinco hechos en concurso real- (art. 11, del régimen penal tributario previsto por el art. 279 de la ley 27.430; art. 45 y 55 del CP y arts. 306 del CPPN).

III.- CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 6.03.2020 por el Juzgado Federal de Villa María, en cuanto dispuso la traba de **EMBARGO** sobre los bienes del imputado **MATÍAS EMANUEL ITURRIA (DNI 36.328.557)** por la suma de pesos cien mil (\$100.000), debiendo anotarse su inhibición si no tuviere bienes o si fueren insuficientes; por las razones dadas en la presente (conf. art. 518 del CPPN y 29 del CP)

IV.- DISPONER que el señor Juez Federal de Villa María, a los efectos que profundizar la investigación y de evaluar la posible comisión de otros delitos perseguibles

Fecha de firma: 27/04/2022

Alta en sistema: 28/04/2022

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#34819161#306580179#20220428084557669

de oficio, por las razones dadas en la presente corra nueva vista al Ministerio Público Fiscal en los términos del art. 180 del CPPN y de los arts. 3 y 4 de la Ley 27.372.

V.- REMITIR POR SECRETARIA copia de la presente al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la AFIP-DGI (Delegación Villa María), para su conocimiento y efectos.

VI.- Sin constas (arts. 530 y 531 del CPPN).

VII.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES
Juez de Cámara

EDUARDO AVALOS
Juez de Cámara

GRACIELA MONTESI
Jueza de Cámara

CELINA LAJE ANAYA
Secretaria de Cámara

